

El 16 de septiembre de 1961 el gobernador saliente de Campeche, don Alberto Trueba Urbina rehusó asistir a la toma de posesión de su sucesor, el coronel José Ortiz Avila. Pertenecientes a grupos políticos rivales, al prestigiado profesor de derecho del trabajo le resultó agravante ser reemplazado por alguien cuya moralidad no avalaba. Y se fue de la capital donde había vivido los seis años de su gobierno. Las notas de prensa de entonces reportan que "huyó a los Estados Unidos", aunque no fue claro que hubiera una causa que lo impulsara a una escapatoria, aunque sí de los temores del maestro universitario por ser detenido.

El 10. de abril de 1975, el primer Rubén Figueroa tomó posesión del gobierno de Guerrero. Pero fuertemente enemistado con quien debía transmitirle el mando, y valido de su amistad con el Presidente Echeverría y de su condición de candidato secuestrado y liberado (lo que pareció otorgarle privilegios especiales), consiguió que Israel Nogueda fuera defenestrado apenas dos meses antes del relevo, con tal de no compartir la ceremonia con ese su enemigo político. Nogueda fue acusado de fraude y dejó el lugar que él mismo ocupaba provisionalmente pues sustituyó a Caritino Maldonado, caído en un accidente de helicóptero cuatro años atrás.

Esos son los antecedentes que en rápido recuento memorioso hallo semejantes a la inopinada ceremonia de transmisión del poder ejecutivo ocurrida anteayer lunes en Chetumal. Entre las varias diferencias que distancian unos casos del actual hay que subrayar la fama pública de Trueba Urbina, a quien en su momento no faltó quien tachara de desequilibrado por anticonvencional, pero que había caminado la mayor parte de su vida --concluída en 1984-- por las sendas del servicio social y público, al lado del movimiento obrero oficialista, en la administración de justicia laboral y en la cátedra universitaria.

Muy otra es la biografía del ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid, típica de la clase política priísta. Alcalde de Cancún, diputado local y federal, senador de la República, hace seis años llegó a la gubernatura con las bendiciones del Presidente Carlos Salinas, quien atestiguó su toma de posesión. En abono de su sucesor, el Presidente Ernesto Zedillo, hay que reconocer su ausencia en la ceremonia respectiva, así como en los frágiles días de campaña electoral, que culminaron con la ardua elección del gobernador Joaquín Hendricks. Claro que el Presidente no se ha abstenido por completo de visitar aquel estado peninsular, pues eso lo hubiera privado de uno de sus placeres recién adquiridos, el buceo submarino. Lo实践ó en aguas de aquel

estado hace menos de una semana, en el disfrutable asueto de los días santos, en un estado de ánimo contrastante con el que probablemente padecía, quizá no lejos de allí, su antiguo correligionario, el gobernador saliente que ya no apareció en público después de rendir su último informe.

Villanueva anticipó entonces claramente las tesis que ahora, desde un lugar ignorado, fuera de "su terruño" y quizá también del país, refrenda en una denuncia insólita. Es paradójico, sin embargo, que el ex gobernador se llame perseguido cuando que lo notable es que no lo sea, a pesar de su precaria posición jurídica.

En efecto, no se ha ordenado su detención aunque desde 1997 ha figurado su nombre en averiguaciones judiciales. A sabiendas de que eso estaba ocurriendo, Villanueva inauguró 1988 adoptando posiciones políticas audaces, tras las cuales poder escudarse si avanzaban las investigaciones. Su temor era justificado, pues no sólo autoridades mexicanas sino la DEA habían reparado que en coincidencia con su gobierno, es decir desde 1993, Quintana Roo se había convertido en una sólida y segura plataforma para el transporte, por aire, mar y tierra, de cargamentos de droga procedentes de Sudamérica hacia Estados Unidos.

Villanueva Madrid fabricó una coartada política con larga anticipación. Se manifestó partidario de que sus colegas Manuel Bartlett y Roberto Madrazo ostentaran sus aspiraciones presidenciales, extremo contrario a la ortodoxia que ordena guardar silencio. E hizo volver a Chetumal al senador Jorge Polanco, a quien puso en el primer lugar de los pretendientes a la silla de gobernador, para dejar claro quién tomaba esas decisiones.

En octubre pasado, cuando fue detenido Gilberto Garza García, un delincuente acogido al programa de testigos protegidos y cuyo testimonio puso en jaque a Villanueva Madrid, el gobernador dio otra vuelta de tuerca a su pretendida heterodoxia. Simuló un enfrentamiento con el mando nacional de su partido. Y hasta demandó la renuncia de Carlos Rojas --antes su amigo, con quien fraguó en 1993 la suprema lambisconería hacia Salinas de llamar Solidaridad a un nuevo municipio--, pedido que con tardanza le fue finalmente obsequiado por el Presidente.

El 20 de febrero, como consecuencia de la vasta información provista por Garza García, se dictaron decenas de órdenes de aprehensión contra acusados de delitos en que Villanueva Madrid aparecía conectado. Pero no se inició un procedimiento formal en su contra. Hubiera podido comenzar a tramitarse su desafuero, pues los gobernadores disfrutan de inmunidad pero no de impunidad cuando cometen delitos comunes. La delicada circunstancia electoral seguramente inhibió esa posibilidad, pero la inacción judicial se alargó hasta permitir a Villanueva ocultarse, sin ser prófugo porque no se ha ordenado aprehenderlo.